

31 octubre 2016

Conclusiones

67^a Asamblea General

Lima, Perú

14 al 18 de octubre de 2011

Los intentos por silenciar a la prensa independiente en la región, han continuado en forma cada vez más intensa a lo largo de 2011. El peligro más grave que deben enfrentar los periodistas es el de la violencia física, el crimen y la impunidad con que se cometen estos delitos. Algunos grupos organizados de narcotraficantes recurren a estos métodos sin detenerse ante el asesinato, lo que ha significado que 21 profesionales de los medios perdieran la vida en este semestre como consecuencia directa de sus actividades; aquellos gobiernos que aspiran a conseguir el mismo objetivo de acallar a la prensa, lo hacen aplicando presiones ilegítimas a través de querrelas judiciales, detenciones arbitrarias, ataques verbales, leyes restrictivas o la simple manipulación de la publicidad oficial. Incluso en aquellos países en que existe amplia libertad de expresión, subsiste la amenaza que representan los más variados proyectos legislativos destinados a coartar esa libertad.

Los asesinatos de periodistas han alcanzado su mayor frecuencia en Honduras y México, puesto que en cada uno de esos países se ha dado muerte a cinco profesionales sólo en los últimos meses. Los crímenes son el reflejo de un clima de agresión y atentados, caracterizado por amenazas en contra de los profesionales y los medios independientes, con el fin de intimidarlos y, en último término, silenciarlos. En Veracruz, México, otros tantos reporteros han tenido que abandonar la ciudad por la inseguridad y el peligro en que viven. También se registraron muertes violentas de periodistas en Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y República Dominicana. En todos esos países, y en otros donde antes se han registrado crímenes similares, se mantiene una vergonzosa impunidad para sus autores. Incluso en países como Colombia, México y Paraguay, se van cumpliendo los plazos de prescripción legal de los homicidios cometidos hace veinte años, sin imputados ni condenados, lo que significa que estos horribles asesinatos quedarán ya

definitivamente sin castigo. Naturalmente, esta impunidad es uno de los factores más importantes para mantener viva la trágica ola de agresiones contra los profesionales de la prensa que se arrastra ya por décadas.

En muchos países de la región, gobiernos intolerantes y autoritarios intentan conseguir el mismo objetivo de enmudecer a los medios. En Ecuador el Presidente de la República presentó una querrela personal exigiendo cifras millonarias y consiguió que jueces suplentes en cuya designación habría influido el propio gobierno le concedieran un fallo favorable a sus aspiraciones. La sentencia de primera instancia establece que cuatro personas deberían ir a la cárcel por tres años y deberían pagarle a la persona del Jefe de Estado una indemnización de 40 millones de dólares. Las numerosas demandas que se han presentado desde entonces contra los medios estimulan un clima de autocensura. Igual ambiente se ha creado en Bolivia por una ley contra el racismo que asigna responsabilidad a los medios por las opiniones de terceros, lo que los ha obligado a suprimir la participación de los ciudadanos en sus sitios de la web. En Venezuela, Ecuador, Argentina y Panamá, los gobiernos procuran crear un clima de hostilidad a los medios, con agresiones verbales que en algunos casos son encabezadas por los propios Jefes de Estado. En esos países, pero también en Guatemala, Nicaragua y algunos países del Caribe, las autoridades intentan manipular las informaciones y las opiniones de los medios asignando la publicidad estatal como premio o castigo. En Argentina, Nicaragua y Venezuela, los gobiernos han montado una red paralela de medios estatales, oficialistas, que a menudo se unen en las campañas de desprestigio contra la prensa independiente.

En Cuba no existe posibilidad alguna de desarrollar medios independientes. Sólo en la Internet, que llega a menos del 2 por ciento de la población, pueden expresarse los periodistas con algún grado de libertad, pero la represión ha ido en aumento. En el último año, las detenciones breves superaron las 2 mil, la cifra más alta en 30 años. Los corresponsales extranjeros también enfrentan dificultades crecientes para renovar sus permisos de trabajo.

El acceso a la información es un punto clave para la transparencia de los organismos estatales, así como para el buen desempeño de los periodistas y los medios. Aunque en algunos países se han conseguido avances en los últimos años, recientemente se ha estancado el progreso y se han postergado o dilatado proyectos legislativos en Brasil y Costa Rica, en tanto ha habido serias dificultades de acceso a la información pública en Canadá, Ecuador, El Salvador, Haití, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela.

En varios países, los gobernantes o los parlamentarios han presentado proyectos de ley que si logran ser aprobados perjudicarán seriamente la libertad de expresión de sus ciudadanos. En Brasil, en provincias de Canadá, en Chile, Colombia, Ecuador los parlamentos discuten diversas iniciativas que sólo conseguirán restringir el libre ejercicio del periodismo.

La Sociedad Interamericana de Prensa declaró el 2011 como Año de la Libertad de Expresión. Al aproximarnos a la conclusión del año comprobamos como las trabas y amenazas a la libertad de prensa han aumentado en nuestro hemisferio.
